Capítulo 7

La Iglesia y las órdenes regulares frente al Patronato republicano, 1819-1821*

ÉDGAR ARTURO RAMÍREZ BARRETO**

El contexto

En el tiempo transcurrido entre la batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819) y la proclamación de la Constitución Política de la República de Colombia (6 de octubre de 1821) los clérigos de la Nueva Granada aún se encontraban en el dilema de a qué autoridad jerárquica obedecer y, al mismo tiempo, cómo sustentar su propia legitimidad religiosa.

La invasión napoleónica a España en 1808 mostró que el privilegio del Real patronato, que imperaba sobre la Iglesia de las Indias, podía dejar de ejercer su poder y autoridad. Pero a su vez, esta ausencia del monarca español, también revelaba la dificultad de instituir una relación directa entre la Iglesia criolla y el Vaticano. El privilegio

* Este texto es resultado del proyecto de investigación “La universidad Tomásica: Ciencia, educación y política en el contexto del Virreinato de la Nueva Granada (1750-1810)”, aprobado y financiado en el marco de la VIII Convocatoria General para el Fomento, Desarrollo y Producción de la Investigación, mediante el acta 492, (código 007 del 5 de marzo de 2014), de la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, D.C.

** Docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás.

del patronato concedido por la Santa Sede a la monarquía española, para la administración de su Iglesia, era una tradición que se había consolidado en el siglo XV para la ofensiva contra los islámicos en la península Ibérica, y luego modificada para la conquista de las Indias.¹ Así, la relación institucional entre la monarquía y la Iglesia española era un entramado administrativo que tenía como principal referente y fundamento a la majestad del rey. En consecuencia, la ausencia del monarca español desintegraba la estructura con la que se había instalado el orden político y la jerarquía de la Iglesia tanto en la península como en las colonias americanas.

Políticamente, tanto en la metrópoli como en las colonias, el vacío del monarca se allanó con la formación de diversas juntas de gobierno con las que, a su vez, se pretendía hacer resistencia a los invasores. Sin embargo, este recurso no aclaraba el estatus del clero secular y regular en estas nuevas circunstancias. En América, al momento de los gritos de independencia, proclamados por las juntas alrededor de 1810, aumentó la incertidumbre de la Iglesia americana, ya que, con la independencia cesaba definitivamente el Real Patronato español. Por esta razón, entre 1810 y 1815 muchas juntas se arrogaron el privilegio de los nombramientos eclesiásticos, argumentando que, si la soberanía era en ese momento de las Juntas, ante la falta del monarca y el establecimiento de la soberanía popular, entonces a ellas les correspondería el nombramiento de las vacantes de obispos y párrocos. El suceso que mejor ilustra esta pretensión autonómica de las juntas, incluso para nombrar obispos, se encuentra en la Villa del Socorro:

[...] la villa del Socorro depuso el 10 de julio a las autoridades coloniales, y procedió a erigir un obispado independiente de la Arquidiócesis de Santafé; esto es lo que se ha llamado el “Cisma del Socorro”. La Junta Suprema del Socorro, invocando su soberanía, declaró el derecho del patronato para organizar una diócesis en la

1 Sobre los inicios del patronato en el Reino de España, como sus diferencias entre algunas provincias españolas y el patronato indiano ver: María Magdalena Guerrero Cano (1983), “El patronato de Granada y el de Indias: algunos de sus aspectos”.

villa. El 10 de diciembre de 1810, la Junta aprobó por unanimidad la erección del obispado. El 11 se hizo la elección de obispo, en la cual el canónigo Rosillo obtuvo 44 votos, y muy pocos los demás nominados. Se consideró que se esperaba el consentimiento del Papa de Roma para obtener la aprobación definitiva; así mismo, se acordó que, si no llegaba la autorización del pontífice, la Junta del Socorro haría lo que más conviniera a sus intereses (López, s.f.).

Sin embargo, el 12 de febrero de 1812, el canónigo Andrés María Rosillo ingresó al coro de la catedral de Santafé de Bogotá; además, participaría como diputado por la provincia del Socorro en el primer Congreso de la Nueva Granada. El clérigo, por lo demás, cedió ante el poder central de Santafé; ciudad que declaraba privilegiada, ante las demás provincias de la Nueva Granada entre 1810 y 1815, no solo por ser la capital del Nuevo Reino de Granada, sino por mantenerse para la nueva república independiente.

Pero, durante la reconquista española, el papel de la Iglesia americana, de algún modo, sería restablecido en el modelo político de la monarquía. Luego de la expulsión de los franceses de España y el reconocimiento de Fernando VII como legítimo rey, por parte de Napoleón en 1813, la monarquía española volvió a reconstruir todos sus privilegios, territorios y súbditos tal como los había tenido antes de 1808. En seguida, el monarca inicia el proceso de reconquista en Indias, reconquista que en la Nueva Granada se llevó a cabo entre 1815 y 1819.

De este período, se deben destacar tres casos que muestran, por un lado, la legitimidad de los nombramientos de los obispos bajo el Real patronato y, por otro, el conflicto que los criollos tuvieron con ellos en torno a los acontecimientos de la independencia. Uno es el del arzobispo de Santafé Juan Bautista Sacristán:

El señor Sacristán había sido presentado por el Rey para arzobispo de Santafé de Bogotá en mayo de 1804, [a fin de suceder] al dominico español fray Fernando del Portillo y Torres, muerto en enero del mismo año. Fue confirmado por el papa cuatro meses más tarde (...) A comienzos de 1805 se trasladó al puerto de Cádiz con intención [de iniciar su viaje], pero la guerra de España con

Inglaterra lo detuvo (...) [luego] La invasión de Napoleón a España en 1808 le [dio] un nuevo pretexto para dilatar su partida, pues habiéndose constituido juntas de gobierno regionales en diversas provincias de España, fue nombrado en uno de los principales lugares dentro de la Junta de Castilla y después en la Junta Central Suprema de España e Indias, en representación [de] su provincia (...) En 1810 se embarcó a América (...) y llega a La Guaira. Allí fue recibido (...) por la Junta de Gobierno que se había formado en Caracas a nombre del rey Fernando VII [la cual] no permitía que el correo continuase a los demás puertos. Intentó entonces fletar otra embarcación para proseguir hacia Cartagena, lo que también le fue impedido por la misma Junta, que solamente le permitió que prosiguiera por tierra. No obstante, el prelado se dio trazas para burlar esta orden y se embarcó en un bergantín inglés que se dirigía a Puerto Rico, donde vino a recibir la consagración episcopal a finales de mayo o comienzos de junio de 1810. El (...) 19 de junio llegó a Cartagena (...) y también se encontró con el rechazo de la Junta de Gobierno, que habiéndolo tratado con altanería y poco respeto, lo obligó a refugiarse precipitadamente en Turbaco, donde finalmente pudo descansar de tantas penalidades. Ignorante de los acontecimientos que entre tanto habían tenido lugar en Santafé, pensó continuar con su familia, (...) y habiendo salido de Cartagena fue subiendo el Magdalena hasta llegar a Mompox. A su llegada a esta ciudad se le notificó la orden de la Suprema Junta de Santafé de que no podía continuar el viaje mientras no reconociera a la Junta. No habiéndolo hecho, se vio obligado a volver atrás y refugiarse de nuevo en Turbaco. (...) Antonio Nariño, [por su parte] (...) [hace publicar el texto]: Conducta del Gobierno de Santafé, después de su transformación, para con el arzobispo electo don Juan Bautista Sacristán, y motivos que han obligado a decretar últimamente, en uso de la potestad tuitiva y económica, su perpetua inadmisión. En la Imprenta Real, por don Francisco Xavier García, año de 1811. Don Juan Bautista Sacristán se vio obligado a refugiarse en Cuba, donde vivió un tiempo en La Habana y otro en Santiago. [Finalmente], la reconquista de los españoles al Nuevo Reino facilitaría [por fin] su ingreso a [la

Nueva Granada] y la toma de posesión de su silla arzobispal [en Bogotá] el 5 de diciembre de 1816, con lo cual vino a ponerse fin a la prolongada vacancia del arzobispado, de diez años y cinco meses. No encontró a Nariño en la capital. (...) Por aquellas grandes ironías de la vida, el arzobispo Sacristán moría solo 57 días después de su entrada a Santafé (...) (Mantilla, 1996).

El caso que se presenta aquí del arzobispo Juan Bautista Sacristán es el típico nombramiento bajo el Real patronato. En 1804 fue presentado por su majestad el rey Carlos IV y luego confirmado por el sumo pontífice Pío VII (Sanz-Díaz, 1978, pp. 219-225). Las dificultades para tomar posesión de su arzobispado en Santafé se debieron, por un lado, a la demora de su salida de la península, causada por la invasión napoleónica a España en 1808. Y por otro, a la coincidencia de su arribo a América en 1810 con las juntas independentistas de Caracas, Cartagena y Santafé que le obstaculizaron su ingreso. Finalmente, solo hasta el período de la reconquista española en América el arzobispo pudo tomar posesión de su jurisdicción eclesiástica en 1816, y el 1 de febrero de 1817 muere. Desde esta fecha el arzobispado de Bogotá estaría vacante hasta 1827.

Otro caso es el del obispo de Popayán Salvador Jiménez de Enciso, presentado el 14 de febrero de 1815 en Madrid para el obispado de Popayán y preconizado el 13 de marzo por el papa Pío VII; esto es, bajo el Real patronato del restituido monarca Fernando VII. El prelado tomó posesión del obispado en Popayán el 7 de mayo de 1818, durante el período de reconquista española. Pero, al siguiente año, en 1819, sucede la definitiva independencia de la Nueva Granada; y en 1821 se proclama la Constitución Política de la República de Colombia.

El obispo de Popayán Jiménez de Enciso no quiso aceptar la autoridad de la Nueva República, y se radicalizó en defensa de la mayestática autoridad del rey Fernando VII. Por esta razón, en 1819, luego de los hechos de la batalla de Boyacá, abandonó Popayán y se radicó en Pasto. En las leyes de la República de Colombia de 1821 se exponen, en relación al obispo de Popayán Jiménez de Enciso, los siguientes hechos aludidos en el Decreto del 11 de enero de 1820:

Cuando los españoles fueron vencidos en el territorio de aquella Diócesis, el Reverendo Obispo don Salvador Jiménez de Enciso, posponiendo las doctrinas del Evangelio a las banderas del Rey de España, se retiró con estas, abandonando el lugar donde le estaba [encargada] la jurisdicción eclesiástica; pero antes de su salida publicó pena de excomunión contra cualquiera que osase ejercerla en su lugar. El magistrado civil a quien está encomendado el orden de la sociedad, la moral pública y la paz general, en cumplimiento de tan sagrados deberes, requirió por primera vez al Reverendo Obispo para que volviese a su Diócesis a usar de todas sus facultades, gozar de todos sus privilegios y prestar a aquellos pueblos los consuelos y beneficios que la religión cristiana nos promete. Este, confiado en que las armas españolas triunfarían de nuevo y destruirían el Gobierno Republicano, contestó al Vicepresidente de Cundinamarca una carta en que con orgullo presuntuoso insulta no solo a su persona, sino gravemente al gobierno, tratando de herejes a cuantos se separasen de la dominación española, destinados al infierno, manifestando que está dispuesto a morir al lado de las armas españolas antes que mudar de opinión, y pidiendo al Vicepresidente de Cundinamarca que no vuelva a entrar en comunicaciones con él (Decreto del 11 de enero de 1820).

Ante lo cual, Francisco de Paula Santander, de la Orden de Libertadores de Venezuela y Nueva Granada, condecorado con la Cruz de Boyacá, general de división de los Ejércitos de la República y vicepresidente de la Nueva Granada, entre otros, decreta:

Que el obispo de Popayán como que no ha prestado el juramento de obediencia al gobierno de la República, conforme a las leyes vigentes, no puede ejercer autoridad alguna en el territorio de Colombia, mucho más cuando por decreto de 11 de enero de 1820 se ha declarado vacante la mitra. (Decreto del 11 de enero de 1820).

Este decreto se amparaba en la ley provisional del 5 de enero de 1820, que decía:

Mientras que por un concordato con la Santa Sede se regla todo lo concerniente al patronato eclesiástico, los vicepresidentes se ceñirán a manifestar que los nombrados para provisores, prelados regulares, vicarios foráneos, curas, párrocos, doctrineros, son o no son de la satisfacción del gobierno, para que se proceda a la posesión o al nuevo nombramiento (Decreto del 11 de enero de 1820).

Sin embargo, luego de cruzar cartas con el Libertador, el obispo Salvador Jiménez de Enciso, en 1823, le escribe al papa lo siguiente:

Confieso a Vuestra Santidad que, al leer su comunicado, mi alma se conmovió con el recuerdo de mi grey que clama por su pastor, y resolví no abandonarla en su desolación [...] Cuando el Excelentísimo Libertador se dignó visitarme y exponerme de nuevo los argumentos fortísimos que había tocado en su carta, al momento determiné volver a mi diócesis y prestar sumisión y obediencia a la República de Colombia, para poder así emprender nuevamente los trabajos de mi ministerio apostólico (Jaramillo, 2008, p. 135).

Finalmente, está el caso de monseñor Rafael Lasso de la Vega, criollo nacido en 1764 en Panamá, obispo de Mérida y Maracaibo. Se ordenó presbítero en Santafé en 1792. En 1804 obtiene la canonjía doctoral de la catedral de Santafé. Cargo que ejerció hasta 1810 y que sostuvo aún durante los hechos del grito de independencia. Por abstenerse de obedecer a la Junta Suprema de Santafé, esta le ordenó residenciarse fuera de la capital neogranadina. En 1813 regresa a Panamá, donde se mantenía la fidelidad al monarca español. Estas decisiones del clérigo le sirvieron de mérito ante el restituido rey Fernando VII, lo que se evidencia el 19 de octubre de 1814, cuando lo propuso como obispo para Mérida y Maracaibo; y a través de la bula del 8 de marzo de 1815 donde fue preconizado por el papa Pío VII (Campo, 1988, p. 21). A este obispo, Fernando Campo (1988) le atribuye la siguiente carta dirigida al papa: “Sálvanos que padecemos [...] Falta el Arzobispo de Santafé y el de Caracas, han muerto los obispos de Santa Marta y Guyana; huye el de Cartagena; el de Popayán y Quito siguen el partido contrario a la República” (p. 24).

Estos casos muestran que, para el inicio del período de la Gran Colombia, la República contaba, al menos, con dos obispos preconizados por el Vaticano: el de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso; y el de Mérida y Maracaibo, monseñor Rafael Lasso de la Vega. El primero finalmente aceptó los términos de la República y moriría en la ciudad a la que fue destinado como obispo, Popayán. El segundo fue el obispo con el que Bolívar contó como figura eclesiástica para los comienzos de la República de Colombia. Pero, los demás nombramientos eclesiásticos debió señalarlos la República sin el formal asentimiento del Vaticano.

No obstante, desde 1820 el Gobierno de Cundinamarca ya venía disponiendo del nombramiento de clérigos, y declarándose en espera de un acuerdo con la Santa Sede en lo relacionado con al patronato; asimismo, años atrás, durante los primeros alzamientos independentistas, la Nueva Granada también había realizado intentos de aproximación a la Silla Apostólica.

En 1811, a la proclamación de la Constitución de Cundinamarca y con el levantamiento del Acta de la Confederación Neogranadina, estas tierras dispusieron una primera aproximación para “negociar un concordato y la continuación del Patronato que el gobierno tiene sobre la iglesia de estos dominios” (López, 2004, p. 155). El segundo intento fue en 1819 con la misión de Venezuela y la Nueva Granada representada por Fernando Peñalver y José María Vergara; pero ninguna alcanzó el destino final. La última tan solo pudo remitir su informe en París mediante el nuncio de su santidad, monseñor Vincenzo Macchi (López, 2004, p. 189).² En este informe se manifestaba al papa Pío VII:

Los gobiernos de Venezuela y Nueva Granada acuden a V.S., con la súplica a fin de que, se restablezca la confianza entre los pastores y sus ovejas, se digne V.S., nombrar como Arzobispos y Obispos para las sedes, que actualmente vacan o vacarán en lo futuro en las regiones sujetas a los dichos gobiernos, a las personas que

2 Informe presentado por Fernando Peñalver y José María Vergara firmado en Londres el 27 de marzo de 1820, copia en el AGN, ver notas.

estos mismos propusieren a S.S. [...] finalmente que a los prelados nombrados de este modo por V.S. conceda la facultad de nombrar párrocos -a las personas propuestas por nuestros Gobiernos (López, 2004, p. 159).

Pero la respuesta del papa a estas misiones, en la que se cuentan también la mexicana de Morelos y la de las Provincias Unidas del Plata, fue negativa. Es más, el 30 de enero de 1816 el papa Pío VII ya había publicado la encíclica *Etsi Longissimo* “dirigida a los obispos de Hispanoamérica exhortándolos para que desarraigaran la cizaña del alboroto y de la sedición, para que recordando las virtudes del Rey Fernando VII expusieran las desventajas de la rebelión y exhortaran a sus fieles a la fidelidad y a la obediencia al legítimo monarca” (López, 2004, p. 164).

En resumen, en la Nueva Granada la legitimidad de la Iglesia, durante la Colonia española y en lo concerniente al nombramiento de obispos y de clérigos, residió en la majestad del rey de España en virtud al patronato real. Por lo tanto, la falta del rey, tal como ocurrió entre 1808 y 1813 debido a la invasión napoleónica a España, truncó el curso legítimo del nombramiento de los clérigos; pues para que un obispo fuese legítimamente posesionado tenía que ser presentado por el rey al papa. Sin esta condición regia, ni si quiera el papa podía declarar algún tipo de nombramiento eclesiástico en la esfera de influencia del rey, a quien el Vaticano le había legado el patronato.

En el caso de la independencia de las colonias españolas, donde el patronato regio español había tenido su efecto, el Vaticano tampoco podía nombrar o legitimar a los clérigos hasta tanto el rey de España lo permitiera, en virtud al compromiso entre el rey de España y el Vaticano. Sin embargo, el valor que investía a los obispos preconizados por el papa podía, incluso, servir a los nuevos gobiernos republicanos para jerárquicamente legitimar, a través de ellos, algunas vacantes religiosas; mientras se pudiese resolver directamente con la Silla Apostólica el patronato o algún tipo de concordato.

Mientras tanto, el 28 de julio de 1824 la República de Colombia sancionaba unilateralmente la ley del patronato eclesiástico, con la que el gobierno de Colombia tomaba sus propias decisiones con respecto a

las vacantes eclesiásticas. Solo hasta 1827 el nuevo papa León XII designaría al arzobispo de Santafé de Bogotá, al de Caracas, de Cuenca, entre otros. Esta fecha se toma, entonces, como el momento en que la Iglesia colombiana empezaría a tener legítimos lazos con el Vaticano.

La Orden de Predicadores

Las órdenes regulares y la de los dominicos en particular no estuvieron ajenas a la incertidumbre de la Iglesia en la Nueva Granada. Como se puede ver en la siguiente cita:

En el caso de los dominicos, la invasión francesa a España (...) hizo que los frailes, dada la bicefalia, que se había instaurado a comienzos de siglo, no tuvieron ni Vicario general, ni maestro general a quién obedecer. Para completar, a partir de 1811 la comunicación se corta definitivamente por unos 20 o 25 años, con cualquier autoridad trasatlántica. Los dominicos colombianos no podían obedecer a un Vicario español y el papa, presionado por el gobierno español, no se decidía a ponerlos bajo la autoridad del maestro de Roma. Solo hasta finales de los años 30, se reinició la comunicación entre la provincia dominicana de la Nueva Granada y sus autoridades naturales en Roma (Plata, 1995, p. 308).

Además de la ausencia de comunicación con la jerarquía del catolicismo, los dominicos colombianos también estuvieron inmiscuidos entre las disputas territoriales de las juntas de gobierno locales:

En orden al contexto político, no hay que olvidar que dentro del conjunto de conventos dominicanos del Nuevo Reino de Granada, el San José de Cartagena tuvo que afrontar la primera emancipación total de España promulgada por una Junta de gobierno en el territorio del Virreinato -la segunda en América después de Caracas, el 5 de julio de 1811-. La entrada en vigencia de nuevos referentes institucionales, pero principalmente de un nuevo orden jurisdiccional, pronto acarreó inconvenientes a la comunidad conventual.

[...], la independencia o subordinación que (por cuanto miembros de la Orden) debían profesar los dominicos apostados en Cartagena a los superiores y maestros del convento Máximo de Santafé produjo recelos e intromisiones por parte de las autoridades civiles [de Cartagena] (Alzate, Benavides y Escobar, 2014, p. 102).

Con estas citas se destacan dos circunstancias de los dominicos: primero, la incomunicación con las jerarquías eclesiásticas europeas, que las expuso ante las autoridades locales; segundo, la disputa de las diversas juntas de gobierno entre 1810 y 1819, que puso a los conventos en la disyuntiva de tener que jurar lealtad o bien a las autoridades locales, o bien al convento Máximo de Santafé de Bogotá, tal como se había establecido desde la colonia.

Luego de 1819, con el nacimiento de la Gran Colombia, la inédita condición republicana no parece dar nuevas esperanzas a la incertidumbre de los regulares. Todavía no se aclara la relación de la Iglesia colombiana con el Vaticano; tampoco se cuenta con la restauración de algún orden jerárquico, legítimo, que de algún modo hubiese permitido una sólida posición frente a la firmeza de los nuevos gobernantes Bolívar y Santander.

En 1821 la flamante República de Colombia, compuesta por la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, recibía su primera constitución. Una de las primeras medidas de los legisladores de la Nueva República fue establecer que todo el clero, regular y secular, debía jurar la constitución y las leyes, en especial los obispos, so pena de no autorizar el ejercicio del ministerio y hasta la reclusión por sospecha de ser “godo”, es decir, realista (Plata, 1995, p. 277).

Pero, antes de la proclamación de la Constitución de 1821 ya se hacía pública la intención de la República con respecto a las órdenes regulares: la ley de la supresión de conventos menores —de menos de ocho frailes—, y la del envío de los regulares a los curatos o parroquias vacantes, esto es, que el gobierno sacaría a los frailes de sus monasterios para satisfacer los faltantes de curas en las provincias; exceptuando los de San Juan de Dios. Estas disposiciones gubernamentales definitivamente quebrantaban la unidad en los monasterios, y la obediencia a sus propias reglas y constituciones:

La extinción de conventos menores se decretó tan pronto nació la República de Colombia, en el Congreso constituyente de Cúcuta en 1821. Es claro que se trataba de medidas que respondía a intereses (...) y, al tiempo, proveer al nuevo Estado de bienes que no tenía. Ya en ese Congreso se discutieron varias “fórmulas” para resolver “el problema monástico”: desde la completa abolición de las Órdenes de frailes y monjas, hasta el envío de todos a las misiones de indígenas, pasando por la reunión en un gran convento y expropiando el resto de sus propiedades (...) La Orden más afectada por esa medida fue la de los Agustinos descalzos (o Recoletos) que estaban mal distribuidos por todo el país y perdieron casi todos sus conventos, menos uno, el de la Capital, donde tuvieron que reunirse todos los religiosos que quedaban. Los dominicos perdieron los de Tocaima, Valledupar, Mariquita, Tolú, Mérida, Muzo, Rioacha, Mompo, las Aguas (en Bogotá), Ibagué, Santa Marta y Pamplona (Plata, 1995, p. 300).

La comunidad de los agustinos descalzos, por su parte, ante estas decisiones gubernamentales, escribía lo siguiente al señor vicepresidente:

[...] La comunidad de Agustinos Descalzos ante vuestra excelencia con todo el respeto debido decimos (...) que supuesta la supresión de los conventos de que se componía nuestra provincia ha concluido esta y por consiguiente (...) [cesa] la autoridad de los prelados, [porque ya] no tienen jurisdicción espiritual y estamos expuestos a que los sacramentos sean nulos y las funciones de la religión absolutamente ilusorias. La comunidad, aunque ha disimulado por algún tiempo estos temores desde la supresión de los Generales Regulares en España (...) [Ha resuelto] Que, concluido el General, desaparecen las leyes que nos regían, y estamos en el caso de [...] determinar qué modo de gobierno debemos adoptar. En cuya libertad suplicamos a Vuestra Excelencia [...] (Conventos, 1820-1829, f. 498).

Además de la extinción de los conventos y de reunir a los frailes en los pocos conventos asignados por la República, las órdenes,

entonces, ante las nuevas exigencias de la República debían elegir un prior. En el caso de los agustinos descalzos, continúan escribiendo al vicepresidente lo siguiente:

La constitución que nos rige está fundada sobre la base de la provincia y tal es el encadenamiento y enlace en todas sus partes. Rota esta constitución ¿con qué facultades [...] los religiosos [contamos] para elegir prior local?; ¿quién confiere a este [prior] las de regir la comunidad? ¿Cuál será la nueva Constitución que ha de gobernar esta nueva observación, y quién la dará o la sancionará? [...] A los Provinciales se les confiere la potestad espiritual, [por] los Vicarios Generales como Delegados del papa, o por los presidentes [...], así como a los Vicarios Generales [...] por el papa mismo, y a los priores locales por el provincial y su defensorio. [...] [Pero, de acuerdo a lo que pide el nuevo gobierno] ¿Quién conferirá repito, la autoridad espiritual a este nuevo Prior? (Conventos, 1820-1829, f. 510).

En cuanto a los dominicos, en un documento se confirma que en el convento de Santo Domingo hubo 26 de los mismos (Conventos, 1820-1829, f. 432v-a), y de este modo la República expedía, entonces, el respectivo certificado de amparo por pobreza. Esta certificación de “amparo por pobreza” no solo se expidió a los dominicos, también a otras órdenes de regulares:

Certifico que por providencia de esta fecha se ha mandado [...] la Alta Corte de Justicia se notifique a los curiales que el convento de Santo Domingo está amparado por pobre y que en procurador en cuanto a los demás juzgados ocurra como le corresponda. Y para que conste doy la presente en la ciudad de Bogotá a veinte y dos de septiembre de mil ocho cientos veinte y uno (Conventos, 1820-1829, f. 432v-a)³.

3 Hay que tener en cuenta que este conteo de frailes dominicos se celebra un mes antes la proclamación de la constitución, la cual fue el 6 de octubre de 1821.

Fray Juan José de Rojas, O.P. y el patronato

Es este el contexto en el que se encuentra el criollo dominico Juan José de Rojas cuando escribe sus consideraciones acerca del patronato republicano. El primer escrito de fray Juan José de Rojas tiene fecha de 26 de noviembre de 1819 (Correspondencia, f. 17-24). Es la respuesta a seis preguntas que rondan la problemática de si “el patronato es inherente a la soberanía”⁴ —esto es que, si la sola declaración del hecho de la existencia soberana de un Estado implica, de por sí, el dominio del Estado sobre su iglesia— que fueron enviadas a prominentes clérigos de la época en la Nueva Granada. La respuesta de fray Juan José de Rojas, como rector de la Tomística, no enfatiza en deliberar acerca de si está de acuerdo o no con el patronato para la nueva República, sino que más bien da algunas recomendaciones ajustadas a la ley y la tradición, sobre el tipo de relación que habría que entablar con la Santa Sede.

El fraile, pues, recomienda que según el Concilio de Trento, el patronato “era solo para emperadores o Reyes” y que esta condición del patronato regio “es inherente a la Soberanía; pero para su honesto o tal vez sólido ejercicio se necesita de la declaración o concesión del pontífice. Esta declaratoria fija los términos del patronato y sus modificaciones” (Correspondencia, 1819, f. 21v). Dice además el fraile que la declaratoria de patronato hecha o concedida a una soberanía, no sufraga para otra. Cada una necesita de la suya; y que, el hecho de que España tuviese tantos privilegios o declaraciones sobre patronato, de eso no se valió Francia ni han sufragado a las otras soberanías.

Así, fray Juan José de Rojas, en este documento de 1819, sostiene que la principal característica del patronato, o del dominio de parte de una soberanía sobre su iglesia es, por definición, para emperadores o reyes; y que este derecho propio a la majestad del soberano no es transferible a nuevos Estados donde antes se hubiese ejercido el patronato, ya que son nuevas soberanías. En el caso de una República, que pidiese

4 Este documento conocido como: *El patronato es inherente a la Soberanía*, se analiza en el artículo “La concepción de Soberanía y Patronato de Juan José de Rojas, O.P., durante la transición de la colonia a la república en la Nueva Granada”, (inédito) por Édgar Arturo Ramírez Barreto.

un patronato, habría que hacer reformas con respecto a lo que formalmente Trento define, pero esto solo concierne a la anuencia del papa.

El segundo texto, de 1820, en que el fray Juan José de Rojas firma con otros provinciales el documento titulado *Preces de los Provinciales de Santo Domingo, San francisco, San Agustín, La Candelaria, y san Juan de Dios de Bogotá*. Documento en el que también aparecen Fernando Peñalver y José Vergara, además del vicario capitular de Bogotá, pidiendo que se dé solución a lo siguiente:

Los regulares que por la profesión de nuestras respectivas reglas y constituciones dependemos de los Vicarios Generales de España, hoy nos hallamos aislados jurada y sostenida la Independencia se trastorna todo el sistema de nuestro instituto; de suerte que sin el pronto y oportuno remedio de un Legado o Vicario Apostólico que fije los artículos de cada una de las constituciones (Conventos, 1820-1829, f. 442).

Y, además:

He aquí, Santísimo Padre, la extrema necesidad en que nos hallamos, y la obligación estrecha en que se halla vuestra Beatitud de socorrernos, concediendo a los Jefes de esta República de Colombia el privilegio del Patronato en los mismos términos que la santidad de vuestros antecesores lo concedieron a la Corona de España, mandando un Legado o Vicario Apostólico que arregle los negocios de esta santa Iglesia en cuanto al clero secular y regular hasta la celebración de un Concilio Nacional y remitiendo las bulas a las personas que por los jefes de esta República fuesen presentadas a Vuestra Beatitud, así para los Arzobispados como para las otras Mitras de estos dominios (Conventos, 1820-1829, f. 443).

Es clara la diferencia entre los dos textos, en el de 1819 Juan José de Rojas expresa que la República no podría pretender un patronato en los mismos términos que el de un imperio como el de España. En el segundo, de 1820, pide un patronato en los mismos términos que

se concedió al rey de España, ¿qué puede, entonces, explicar esta diferencia de criterios con respecto al patronato?

Tal vez, se pueda concluir que la diferencia se explica por las mismas circunstancias en las que se encontraba el clero regular luego de la Independencia en 1819. En la que los clérigos, sin tener la posibilidad de ampararse en la jerarquía de la Iglesia europea, solo se encontraban ante la posibilidad de la obediencia a la Nueva República, a sus jefes políticos, sus dictámenes y sus leyes.

Cierre

En la Nueva Granada, entre 1819 y 1821, es muy difícil afirmar que la Iglesia tuviese algún tipo de autonomía frente al Estado. Ante la orfandad en que se encontraba la Iglesia, puesto que no estaba amparada por la jerarquía de Roma, la Iglesia quedaba dependiente del nuevo Estado, puesto que así también se entendía el papel de la Iglesia en el antiguo régimen. Pero la legitimidad de la relación con el Estado solo era posible en tanto que se estableciese un patronato. Sin embargo, Roma de ningún modo insinuó la posibilidad de un patronato con la República de Colombia.

El nuevo Estado tomó por su lado sus decisiones con respecto a la Iglesia. Donde más se aprecia su intervención es precisamente en las órdenes regulares, cuando los constituyentes de 1821 se preguntaban sobre la necesidad de los regulares en la Iglesia, y las disposiciones que de hecho se tomaron con los monasterios y sus reglas.

La carta de los regulares enviada al papa en 1820, solo da cuenta de los intereses del Estado, más si se compara con la enviada por Fernando Peñalver y José María Vergara, a título de los gobiernos de Venezuela y Nueva Granada, ya que en ambas cartas se exponen los mismos argumentos con respecto al patronato que exige la República de Colombia al Vaticano.

Referencias

Fuentes primarias

Archivo General de la Nación, Bogotá.

Conventos. (1820-1829). (Sección República. Conventos. SR.30, 1 y 2. Legajo. f. 498).

Conventos. (1820-1829). (Sección República. Conventos. SR.30, 1 y 2. Legajo. f. 510).

Conventos. (1820-1829). (Sección República. Conventos. SR.30, 1 y 2. Legajo. f. 432).

Conventos. (1820-1829). (Sección República. Conventos. SR.30, 1 y 2. Legajo. f. 427).

Conventos. (1820-1829). (Sección República. Conventos. SR.30, 1 y 2. Legajo. f. 442).

Conventos. (1820-1829). (Sección República. Conventos. SR.30, 1 y 2. Legajo. f. 443).

Archivo de la Provincia Dominicana de Colombia, APDC

Correspondencia de. (26 de noviembre de 1819). Correspondencia de autoridades civiles. (San Antonino, provincia, Curia, f. 17-24).

Fuentes secundarias

Alzate, M., Benavides, F., y Escobar, A. (2014). *La vida cotidiana en el Convento San José de Cartagena de Indias hacia mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX*. Bogotá. D.C.: Ediciones USTA.

Guerrero, M. (1983). El patronado de Granada y el de Indias: alguno de sus aspectos. (1982). *Actas de las II Jornadas de Andalucía y América*. (T. I). Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. En línea: <http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/302/03JIITI.pdf?sequence=1>

Jaramillo, T. (2008). Clero insurgente y clero realista en la revolución colombiana de la Independencia. *Anuario de Historia de la Iglesia*, (17): 119-136.

- López, J. (s.f.). Rosillo y Meruelo, Andrés María. En *Biografías biblioteca Virtual del Banco de la República*. En línea: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/rosiandr2.htm>. Consultado el 22 de octubre de 2014.
- López, A. (2004). *Gregorio XVI y la reorganización de la iglesia hispanoamericana: el paso del régimen de patronato a la misión como responsabilidad directa de la Santa Sede*. Roma: Editrice Pontificia Universita Gregoriana.
- Mantilla, L. (1996). Nariño impide al arzobispo Sacristán tomar posesión de la sede santaferña. *Historia Credencial*, 78. En línea: <http://www.banrepcultural.org/node/32676>.
- Plata, W. (1995). La Iglesia Católica en la Nueva Granada. Un proceso de cambios, corrientes y dualidades. *Indice del periódico el Catolicismo. Primera época: 1849-1861. (Vol. 1)*. Colombia: Biblioteca Nacional de Colombia. Palabras.
- Sanz-Díaz, J. (1978). El maranchonero D. Juan Bautista Sacristán y Martínez-Atance vigésimo Arzobispo de Santafé de Bogotá. Wad-al-Hayara. *Revista de Estudios de Guadalajara*, (5): 219-236. En línea: <http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Wad/wad05Sanz.pdf>